17076

ORDEN número 111/10012/80, de 16 de junio de 1980, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de Valladolid, dictada con fecha 12 de febrero de 1980, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel Fernández Suárez.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valladolid, entre partes, de una como demandante, don Manuel Fernández Suárez, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra resolución del Ministerio de Defensa de 24 de agosto de 1979, se ha dictado sentencia con fecha 12 de febrero de 1980, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Estimamos el recurso interpuesto por don Manuel Fernández Suárez, contra resolución del Ministerio de Defensa de 24 de agosto de 1979, dictada por delegación, por el excelentísimo señor General Jefe del Estado Mayor del Aire, que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra Orden ministerial número mil quinientos sesenta y cinco/mil novecientos setenta y nueve, de once de mayo del mismo año, que concedía al recurrente el ascenso al empleo inmediato superior con antigüedad de once de mayo de mil novecientos setenta y nueve y anulamos ambas disposiciones por ser contrarias a derecho, y en su lugar declaramos que la fecha de dicha antigüedad debe ser la de ocho de mayo del mismo año, siempre que en dicha fecha hubiera correspondido ya, el ascenso al que le precede en el escalafón, lo que en caso de duda podrá acreditarse en período de ejecución de sentencia; sin hacer expresa condena en costas a las partes litigantes.»

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial» número 363), ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 18 de junio de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor del Aire (JEMA).

17077

ORDEN número 111/10025/80, de 23 de junio de 1980, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional dictada con fecha 2 de octubre de 1979 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Entidad «Hijo de Miguel Carabajo».

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, entre partes, de una como demandante, «Hijo de Miguel Carabajo», quien postula por sí mismo; y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra la resolución del Ministerio del Aire, de fecha 12 de enero de 1977, se ha dictado sentencia con fecha 2 de octubre de 1979, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso interpuesto por la Entidad «Hijo de Miguel Carabajo», contra la resolución del Ministerio del Aire, de fecha doce de enero de mil novecientos setenta y siete, que denegó la solicitud de aumentos en el precio del kilogramo de harina, de los que había de suministrar a la Primera Región Aérea setenta mil kilogramos, y contra la resolución de la misma autoridad, de fecha veinticinco de abril de igual año, que desestimó el recurso de reposición formulado contra la anterior, cuyos actos administrativos expresamente anulamos y dejamos sin efecto, por no ser ajustados a derecho, y, en su lugar, declaramos que procede la revisión, de precios solicitada, cuya cuantía y correspondiente indemnización, se fijará en período de ejecución de sentencia, con arreglo al criterio de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, calculando su valor de forma que compense estrictamente el mayor costo de la harina pendiente de entrega en el momento de la implantación de los nuevos precios del trigo; sin hacer imposición de costas.»

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial» número 363), ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo digo a V. E. para conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 23 de junio de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor del Aire (JEMA).

17078

ORDEN número 111/10024/80, de 23 de junio de 1980, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 4 de octubre de 1979 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Santos de Candarillas Carmona, como Procurador de «Remolques y Servicios Marítimos, S. A.».

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, entre partes, de una como demandante, don Santos de Candarillas Carmona, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra las resoluciones del Tribunal Marítimo Central, se ha dictado sentencia con fecha 4 de octubre de 1979, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso promovido por don Santos de Candarillas Carmona, como Procurador de «Remolques y Servicios Marítimos, S. A.», contra las resoluciones del Tribunal Marítimo Central, que calificaron los servicios prestados por el remolcador «Duende», como de remolque, y contra la que desestimó el recurso de alzada, por estar ajustadas a derecho; todo ello sin costas.

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Estado» número 363), ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 23 de junio de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

Excmo. Sr. Subsecretario.

M^o DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

17079

ORDEN de 26 de mayo de 1980 por la que se resuelven asuntos de conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana, texto refundido de 9 de abril de 1976, y en el Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, y la Orden ministerial de 6 de junio de 1979, con indicación de la resolución recaída en cada caso.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana, texto refundido de 9 de abril de 1976, y en el Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, y la Orden ministerial de 6 de junio de 1979, se resuelven los asuntos que se indican:

1. Catarroja (Valencia).—Recurso de reposición interpuesto por don Agustín Irlán Valera del Cerro, en nombre y representación de «Plastic-Omnium Ibérica, S. A.», contra la Orden ministerial de 10 de junio de 1977, aprobatoria del plan parcial de la zona industrial de Catarroja (Valencia).

Se acordó estimar el recurso de reposición interpuesto por don Agustín Irlán Valera del Cerro, en nombre y representación de «Plastic-Omnium Ibérica, S. A.», contra la Orden ministerial de 10 de junio de 1977, aprobatoria del plan parcial de la zona industrial de Catarroja (Valencia), que se revoca, debiendo el Ayuntamiento de la citada localidad estudiar la solución idónea que imponía la Orden ministerial de 21 de enero de 1976.

2. La Carlota (Córdoba).—Recurso de alzada interpuesto por don Carlos Luca de Tena, como Presidente del Colegio de Arquitectos de Andalucía Occidental y Badajoz, contra el acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de 15 de febrero de 1978, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia el 4 de abril del mismo año, por el que se aprobó el proyecto de delimitación del suelo urbano y Ordenanzas de edificación de La Carlota (Córdoba).

Se acordó estimar el recurso de alzada interpuesto por don Carlos Luca de Tena, en representación del Colegio de Arquitectos de Andalucía Occidental y Badajoz, contra el acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de 15 de febrero de 1978, en los términos expresados en la presente resolución, y denegar la aprobación del proyecto de delimitación de suelo urbano y Ordenanzas reguladoras de La Carlota.

3. San Andrés de Llavaneras (Barcelona).—Recursos de alzada formulados por don Rafael Ramoneda Rubio, don Félix Llobet Andrés, don José Daurella Franco, don Antonio Negro Villavecchia, don Miguel Soler Llopis, don Carlos Fradera Butsems, don Santiago Fradera Butsems, don Arturo Mas Sardá Laguna, don Fernando Iglesias Estaun, don José Corominas, don Santiago Güell, don Eusebio Díaz, doña Francisca Martí,

don Raimundo Casanovas, don Máximo Fernández, don José Regás, don Miguel Sales, don Federico Ituarte, don Joaquín Lemonnier, don Jaime Serra, don Fernando Cabestany, don Guillermo Cabestany, doña María Rey, doña María Carmen Rabassa, doña Carmen Rey, don Francisco Graupera, don José Re, don José Graupera, don José Bertrán, don Juan Graupera, don Juan Juliá Mas, don Juan Soldevilla, don Jorge Ligüerre, don José Luis Toca, don Salvador Bernadés, doña María Isabel Garrigo, don Juan José Elizalde, don Alberto Alarcón, don Luis Lemonnier, don Guillermo Batlló, don Vicente Punsola, don Ramón Noguera, don Pedro Pérez, don José Passi, don José María Rosal, don Jaime Riviere, don Juan Serra, don Juan Ibean y don José Lloveras, contra el acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona, de 27 de enero de 1978, aprobatorio de las normas subsidiarias de Planeamiento del término municipal de San Andrés de Llavaneras (Barcelona).

Se acordó:

a) Estimar los recursos formulados por don Miguel Soler, don Carlos Fradera, don Santiago Fradera, don Santiago Güell, don Raimundo Casanovas, don Fernando Iglesias Estaun y don Federico Ituarte Chopitea, en el sentido de que se proceda a otorgarles la calificación solicitada por los anteriores en sus respectivos escritos de recurso, si bien deberá imponerseles la obligación de la confección previa del oportuno plan parcial conforme preceptúa el artículo 71. apartado 4. c), de la vigente Ley del Suelo.

b) Estimar, condicionándolo a su uso actual, el recurso formulado por don José María Rosal Caralt.

c) Estimar en parte los recursos formulados por don Rafael Ramoneda Rubio, don Luis Lemonnier de Caralt, don Jorge Ligüerre Cufí y don José Luis Roca Sáez, con las consideraciones hechas en la presente resolución.

d) Desestimar los recursos presentados por don Félix Llobet, don José Daurella, don Antonio Negre, don Arturo Mas Sardá, don José Corominas, don Eusebio Díaz Morera, doña Francisca Martí, don Máximo Fernández, don José Regás, don Miguel Sales, don Joaquín Lemonnier, don Jaime Serra, don Fernando Cabestany, don Guillermo Cabestany, doña María Rey, doña María Carmen Rabassa, doña Carmen Rey, don Francisco Graupera, don José Re, don José Graupera, don José Bertrán, don Juan Graupera, don Juan Juliá, don Juan Soldevilla, don Salvador Bernadés, doña María Isabel Garrigo, don Juan José Elizalde, don Alberto Alarcón, don Guillermo Batlló, don Vicente Punsola Mora y otros, don Ramón Noguera, don Pedro Pérez, don José Passi, don Jaime Riviere Manén, don Juan Serra, don Juan Ibean Casals, don José Lloveras Salas, en virtud de las razones argumentadas en los considerandos generales de la presente resolución.

4. Alicante.—Recurso de reposición formulado por don Francisco Riaz Rubio, en nombre de «Inmobiliaria Espacio, Sociedad Anónima»; don Alberto Aguirre Gómez de la Torre, en nombre de «Inmobiliaria Daiana, S. A.», y don Mateo Gonzalo Asenjo, en nombre de «Gobay, S. A.», contra la Orden ministerial de 4 de octubre de 1979, denegatoria del proyecto de modificación del plan general de ordenación urbana de Alicante, para la ampliación del primer polígono de la playa de San Juan.

Se acordó estimar el recurso de reposición interpuesto por don Francisco Riaz Rubio, en nombre de «Inmobiliaria Espacio, S. A.»; don Alberto Aguirre Gómez de la Torre, en nombre de «Inmobiliaria Daiana, S. A.», y don Mateo González Asenjo, en nombre de «Gobay, S. A.», contra la Orden ministerial de 4 de octubre de 1979, denegatoria del proyecto de modificación del plan general de ordenación urbana de Alicante, para la ampliación del primer polígono de la playa de San Juan, que se revoca, y, en consecuencia, aprobar el indicado proyecto de modificación del plan general, calificando como urbanos los terrenos a que se refiere el presente expediente, a los que serán de aplicación las normas urbanísticas definidas por el plan general para el primer polígono.

Lo que se publica en este «Boletín Oficial del Estado» de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Suelo, significando que contra estas resoluciones que se transcriben, definitivas en vía administrativa, cabe contra los números 1 y 4 la interposición del recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a esta publicación, y contra los números 2 y 3 la interposición del recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de esta publicación; también cabe, con carácter potestativo y previo al contencioso-administrativo, la interposición del recurso de reposición ante el Ministro de Obras Públicas y Urbanismo en el plazo de un mes, a contar, igualmente, desde el día siguiente al de esta publicación, en cuyo supuesto, el recurso contencioso-administrativo habrá de interponerse en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición, si es expreso, o si no lo fuere, en el plazo de un año, a contar de la fecha de interposición del recurso de reposición.

Lo que comunico a V. I.

Madrid, 26 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario de Obras Públicas y Urbanismo, Manuel Pérez Olea.

Ilmo. Sr. Director general de Acción Territorial y Urbanismo.

17080

RESOLUCION de 30 de mayo de 1980, de la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que se hace pública la concesión solicitada por doña María del Carmen Abad Aponte de un aprovechamiento de aguas públicas subálveas del río Vélez, en el término municipal de Vélez-Málaga (Málaga).

Doña María del Carmen Abad Aponte ha solicitado la concesión de un aprovechamiento de aguas públicas subálveas del río Vélez, en término municipal de Vélez-Málaga (Málaga), y

Esta Dirección General ha resuelto conceder a doña María del Carmen Abad Aponte el aprovechamiento de un caudal máximo de 1,527 litros por segundo continuos de aguas públicas subálveas del río Vélez, con destino al riego por gravedad de 1,5270 hectáreas, sin que pueda sobrepasarse el volumen anual de 8.000 metros cúbicos por hectárea regada, en una finca de su propiedad, al pago de Cabrillas, en término municipal de Vélez-Málaga (Málaga), con sujeción a las siguientes condiciones:

Primera.—Las obras se ajustarán, en esencia, al proyecto suscrito por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, don José A. Caffarena Laporta, visado por la Delegación en Málaga del Colegio Oficial, con el número de referencia 812/78, en el que figura un presupuesto de ejecución material de 762.434,50 pesetas, el cual se aprueba a los efectos de la presente concesión, en cuanto no se oponga a las condiciones de la misma. La Comisaría de Aguas del Sur de España podrá autorizar pequeñas variaciones que tiendan al perfeccionamiento del proyecto y que no impliquen modificaciones en la esencia de la concesión.

Segunda.—El proyecto se complementará con un anejo en el que se haga constar, bien la variación de la potencia elevadora adaptándola al caudal de concesión o, de no variar aquella, el plano del depósito regulador, dimensionado y emplazado, así como la solución a adoptar en la toma, de acuerdo con el contenido del artículo 32 de la vigente Ley de Aguas, lo que deberá cumplimentarse en el plazo de tres meses a partir de la publicación de la concesión.

Tercera.—Las obras comenzarán en el plazo de tres meses contado a partir de la fecha de publicación de la concesión en el «Boletín Oficial del Estado» y deberán quedar terminadas en el plazo de seis meses contados a partir de la misma fecha. La puesta en riego total deberá efectuarse en el plazo máximo de un año contado a partir de la terminación de las obras.

Cuarta.—La Administración no responde del caudal que se concede y su modulación vendrá determinada por el tiempo de funcionamiento del grupo elevador si se procede a la construcción del depósito regulador o por la limitación de la potencia estricta del grupo si se suministra el caudal continuo. No obstante, se podrá obligar a la concesionaria a la instalación a su costa de los dispositivos de control o moduladores de caudal de las características que se establezcan. El Servicio comprobará especialmente que el volumen utilizado por la concesionaria no exceda en ningún caso del que se autoriza, sin que diariamente pueda derivarse un volumen superior a 132.000 litros.

Quinta.—La inspección y vigilancia de las obras e instalaciones, tanto durante la construcción como en el periodo de explotación del aprovechamiento, quedarán a cargo de la Comisaría de Aguas del Sur de España, siendo de cuenta de la concesionaria las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se originen, debiendo darse cuenta a dicho Organismo del principio de los trabajos. Una vez terminados, y previo aviso de la concesionaria, se procederá a su reconocimiento por el Comisario Jefe o Ingeniero del Servicio en quien delegue, levantándose acta en la que conste el cumplimiento de estas condiciones, sin que pueda comenzar la explotación antes de aprobar esta acta la Dirección General de Obras Hidráulicas.

Sexta.—Se concede la ocupación de los terrenos de dominio público necesarios para las obras. Las servidumbres legales serán decretadas, en su caso, por la autoridad competente.

Séptima.—El agua que se concede queda adscrita a la tierra, quedando prohibido su enajenación, cesión o arriendo con independencia de aquella.

Octava.—La Administración se reserva el derecho de tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios para toda clase de obras públicas, en la forma que estime conveniente, pero sin perjudicar las obras de aquella.

Novena.—Esta concesión se otorga por un plazo de noventa y nueve años, sin perjuicio de tercero y salvo el derecho de propiedad, con la obligación de ejecutar las obras necesarias para conservar o sustituir las servidumbres existentes.

Diez.—La Comisaría de Aguas del Sur de España podrá acordar la reducción del caudal cuyo aprovechamiento se autoriza, e inclusive suspender totalmente el aprovechamiento durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y 30 de septiembre en el caso de no quedar caudal disponible, una vez atendidos otros aprovechamientos preexistentes o preferentes del río Vélez, lo que comunicará al Alcalde de Vélez-Málaga, para la publicación del correspondiente edicto y conocimiento de los regantes.

Once.—Esta concesión queda sujeta al pago del canon que en cualquier momento pueda establecerse por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, con motivo de las obras de regulación de la corriente del río realizadas por el Estado.

Doce.—Cuando los terrenos que se pretende regar queden dominados en su día por algún canal construido por el Estado,